

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA



I LEGISLATURA

Comisión de Administración y Procuración de Justicia
Reunión de Trabajo

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA

Salón Heberto Castillo

29 de julio de 2019

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.- Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. La Comisión de Administración y Procuración de Justicia agradece mucho su asistencia a esta sesión ordinaria de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, en donde se pondrá a consideración de las y los diputados integrantes de la misma la propuesta de modificaciones al Código Penal y a la Ley de Cultura Cívica.

Para este efecto, le quisiera solicitar al diputado secretario Diego Orlando Garrido, si nos hace el favor de pasar la lista de asistencia.

EL C. SECRETARIO DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ.- Procedemos a hacer pase de lista de asistencia.

(Pasa lista de asistencia)

Tenemos el quórum respectivo, diputado presidente, en virtud que tenemos la asistencia de 12 diputadas y diputados.

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado secretario. Quisiera que pudiera ayudarme a someter a la consideración de las y los diputados integrantes de la comisión el orden del día que está contemplado para esta sesión. Si pudiera darse lectura y someter a la votación de los integrantes y las integrantes el respectivo orden del día.

EL C. SECRETARIO.- Doy lectura al orden del día.

1.- Verificación de quórum

2.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día

3.- Discusión y en su caso aprobación del dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México

4.- Asuntos generales

EL C. PRESIDENTE.- Es de preguntar a las y los diputados si es de aprobarse el orden del día. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano.

EL C. SECRETARIO.- Es aprobado por unanimidad, diputado presidente.

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado secretario. A continuación, presentamos a las y los diputados integrantes de esta comisión, así como a las y los diputados que nos hacen el favor de acompañarnos en esta importante sesión el dictamen que presenta esta Comisión de Administración y Procuración de Justicia respecto de diversas iniciativas que han sido presentadas ante la misma.

Quisiera señalar, que efectivamente entre los antecedentes, que el 8 de julio de 2019 la doctora Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México presentó una iniciativa de reformas al Código Penal del Distrito Federal con el propósito de fortalecer la estrategia en materia de seguridad en la Ciudad de México.

De igual manera, el 8 de noviembre el diputado Héctor Barrera Marmolejo presentó una propuesta de modificación al artículo 234 bis del Código Penal; que el 10 de julio de 2019 el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León presentó una iniciativa también de reformas al artículo 81 del Código Penal; el 10 de julio de 2019 los diputados Mauricio Tabe, Diego Orlando Garrido y Héctor Barrera, del grupo parlamentario de Acción Nacional, presentaron una iniciativa de decreto de reformas al Código Penal; que el 8 de julio de 2019 el diputado Héctor Barrera presentó una modificación al artículo 223 del Código Penal.

De igual manera, quiero resaltar que la diputada Teresa Ramos presentó también una iniciativa de reformas al Código Penal que proponía la revisión de la sanción en el caso del tipo de feminicidio, del tipo penal de feminicidio, quiero señalar que esta fue turnada en primera instancia a la Comisión de Justicia y que se amplió el turno a la comisión

también de Género, que en virtud de esa circunstancia no habrá de ser dictaminada en este momento, pero que se retoma también de manera importante la propuesta de la diputada proponente.

Queremos señalar en términos generales, la propuesta o la estructura del dictamen. El dictamen coincide con el hecho de la iniciativa planteada por la Jefa de Gobierno que ha sido la iniciativa base que se ha tomado para este ejercicio de dictaminación.

Consideramos coincidentemente con la Jefa de Gobierno que el diseño de una política criminal en la Ciudad de México tiene que analizar diversos factores sociales, jurídicos y de manera especial en el ámbito del derecho penal; que es muy importante trabajar la prevención social del delito, que de igual manera reforzar los esquemas de seguridad ciudadana en la Ciudad de México y de manera muy importante hacer una revisión integral del marco jurídico penal de la Ciudad de México, a efecto de que la normatividad penal sea acorde a la realidad que vive la Ciudad de México, así como avanza la tecnología también es cambiante el fenómeno delictivo y, ante ello, el marco jurídico no puede mantenerse inamovible.

Por ello, es que este Congreso ha considerado muy importante hacer este ejercicio de revisión integral de la política criminal a partir de estos delitos y a partir de estos tipos penales que consideramos que generan un agravio muy importante a la ciudadanía. La revisión de estos tipos penales que también consideramos que son fundamentales para poder fortalecer la estrategia en materia de combate a la inseguridad en la Ciudad de México.

Quisiera resaltar los diversos aspectos que se plantean en el dictamen que se pone a consideración de las y los diputados integrantes de esta comisión. En primera instancia se hace un ejercicio muy importante en materia de reincidencia.

Se establece la figura de la reincidencia en el Código Penal de la Ciudad de México considerando que es uno de los diversos factores que dan como origen a lo que se ha denominado la llamada puerta giratoria y que el problema que nos enfrentamos es una serie de personas que han cometido diversos delitos y que no tienen una sanción adicional.

Se contempla por lo tanto en el Código Penal la figura de la reincidencia y, al mismo tiempo, se establecen cuáles son los efectos de la misma. Se establece que la

reincidencia será tomada en cuenta por el juzgador para poder determinar la imposición de la sanción, así como el otorgamiento o no de beneficios o de sustitutivos penales.

Consideramos también un avance muy importante que tratándose de delitos considerados como graves, en la Ciudad de México se establece que en la segunda comisión de un delito se establezca una pena adicional de las dos terceras partes del delito que corresponde.

Consideramos que esta figura será un instrumento ágil, un instrumento muy importante para poder inhibir y sancionar de manera adecuada a las personas que tienen reincidencia, tratándose de delitos graves.

También es muy importante señalar que se hizo una revisión del tipo de feminicidio, que es una de las aportaciones más importantes de la iniciativa de la Jefa de Gobierno, así como de la iniciativa que fue planteada por la diputada Teresa Ramos, en el sentido de que en primera instancia teníamos dos tipos de feminicidio, el tipo básico de feminicidio en donde se desarrollaban toda una serie de hipótesis en las cuales se consideraba la denominada razón de género y esta denominada razón de género que daba motivo al feminicidio, está contemplada actualmente con una pena de 20 a 50 años de prisión, es decir, tenemos la misma penalidad que el homicidio calificado.

De tal manera que llegamos a la conclusión que, en el régimen actual, el feminicidio no es para el Código Penal más que un homicidio calificado, considerando que es mucho más complejo poder determinar las razones de género como motivo para que se le haya privado de la vida a una mujer, y que existía una agravante, que era que existieran antecedentes o que existiera una relación sentimental o afectiva entre el actor y la víctima. En este caso se consideraba una penalidad agravada de 30 a 60 años, es decir, el feminicidio básico lo teníamos de 30 a 50, el feminicidio agravado lo teníamos contemplado de 30 a 60 años.

La iniciativa de la Jefa de Gobierno propone que esta relación afectiva ya no sea considerada como agravante, sino como parte fundamental de la definición del feminicidio, en la que esta dictaminadora coincide absolutamente. Consideramos que efectivamente no es un agravante el hecho que exista una relación afectiva, como puede ser matrimonio, noviazgo, unión libre o cualquier otro tipo de relación afectiva, sino que ahí está precisamente una razón de género.

En el momento que se incorpora esta hipótesis como parte de la razón de género consideramos que no podría quedar solamente en esos términos, porque estaríamos desapareciendo la agravante. Por eso es que se ha hecho esta propuesta que el feminicidio tenga una reclasificación en la pena, para establecer una pena de entre los 35 y los 70 años de prisión.

Esto consideramos que es un mensaje muy importante de este Congreso y de la Ciudad de México para establecer que bajo ninguna circunstancia se puede permitir que haya la privación de la vida a una mujer en la Ciudad de México.

Consideramos también fundamental este mensaje, porque con ello se lograría que el feminicidio se convierta en el tipo penal con la sanción más alta en la Ciudad de México, con lo cual desde nuestro punto de vista se cumple también con una demanda social muy importante.

En lo que corresponde a la revisión de tipos penales en materia de robo, se hizo una revisión sobre todo al artículo 224 en el sentido que se establece, se dejan las penalidades en el caso del robo simple señaladas en el artículo 220, y se hace una revisión muy importante en lo que corresponde al artículo 224.

Aquí tenemos una serie de fenómenos delictivos en materia de robo que están causando un gran riesgo social, que se han incrementado en los últimos años y en los cuales el Estado no tiene los instrumentos suficientes y adecuados para poder hacer frente a este fenómeno delictivo.

Entre estos aspectos se establece, en el caso de robo a casa habitación, actualmente tiene una penalidad de 2 a 6 años, una agravante, perdón. Quiero señalar que en el caso de todos los robos en primera instancia se aplican las disposiciones señaladas en el artículo 220 del Código Penal, que establece que la sanción va en relación a la cuantía de lo robado. A partir de determinar esa cuantía y esa sanción, se establece la posibilidad de la agravante cuando se trata de robo con violencia y las diversas agravantes consideradas en este artículo 224.

Consideramos que en el caso de robo a casa habitación, era inadecuado que estuviera con una agravante mínima de 2 a 6 años, consideramos que el robo a casa habitación, como incluso lo hace en este caso el proponente, el diputado Héctor Barrera, en el caso de robo a casa habitación se establecen una serie de conductas que ponen en mayor riesgo a las personas, es decir, el robo a casa habitación es algo más que una afectación

al patrimonio de las personas, ya que para la comisión del robo en casa habitación tiene que haber evidentemente la introducción de personas ajenas que normalmente se hacen con violencia, que lleva implícita la realización de amenazas, de lesiones, en algunos casos abusos sexuales o incluso violaciones y que efectivamente consideramos que el espacio en donde las personas deben sentirse con mayor nivel de seguridad es precisamente el de su hogar. Por ello es que se está planteando agravar la pena actualmente pasando de 2 a 6 años a una agravante de 4 a 8 años de prisión.

También consideramos que debe haber un ejercicio muy importante en lo que corresponde al robo de autopartes o el robo de vehículo, actualmente se tenía contemplado en una sola hipótesis, de tal manera que la misma sanción corresponde para alguien que se robe una autoparte que para alguien que se robe el automóvil completo; la agravante es de 2 a 6 años en este momento. Nosotros consideramos, esta dictaminadora que se trata de hipótesis completamente diferentes, que el grado de afectación a los bienes de las personas y a la estabilidad social son distintas en ambos casos. Por ello es que se propone una diferenciación para que la agravante en el caso de robo de autopartes sea de 2 a 6 años, pero que en el caso de robo de automóvil pueda ser de 4 a 8 años.

Queremos señalar también de manera muy importante que tratándose del robo a celular, es uno de los delitos que generan evidentemente una mayor inconformidad social. Como lo ha señalado la proponente, la Jefa de Gobierno, el robo a celular es un robo que va más allá de una mera afectación de carácter económico, ya que en un celular se tiene información privilegiada, información confidencial, personal, íntima de las personas, de tal manera que en un teléfono celular se pueden tener datos de personas, información bancaria, fotografías, videos. Por ello es que consideramos que es muy importante que se pueda establecer esta nueva hipótesis en la fracción IX del artículo 224 del Código Penal con una sanción agravada también de 2 a 6 años de prisión.

Consideramos también, que otro fenómeno delictivo que ha crecido en los últimos años en la Ciudad de México es el robo en motocicleta. Consideramos que en este caso el actor tiene una evidente ventaja y una sorpresa sobre la víctima, de tal manera que la víctima tiene menores condiciones de poder defenderse o de poder evitar el robo o la agresión. Por eso consideramos muy importante que se pueda establecer esta agravante también con una pena de 2 a 6 años de prisión.

Se hace un ejercicio también fundamental en lo que corresponde al robo a cuentahabiente, que no era una hipótesis que tuviéramos contemplada en el Código Penal de la Ciudad de México, solamente teníamos contemplado el robo a transeúnte o el robo a sucursal bancaria. En este caso nosotros consideramos que cuando se comete el delito de robo a cuentahabiente existe evidentemente una mayor planeación por parte del actor o de los actores y que de igual manera la víctima tiene una menor posibilidad de poder defenderse.

Por eso es que se establece efectivamente que procederá también una agravante en el caso de robo a cuentahabiente y que se establece bajo la siguiente hipótesis: en contra de persona que realice operaciones bancarias o financieras, depósito o retiro de efectivo o de títulos de crédito al interior de un inmueble, en cajero automático o inmediatamente después de su salida.

Un ejercicio también fundamental que se ha hecho en el dictamen ha sido el aceptar en los términos de la iniciativa de la Jefa de Gobierno las modificaciones en lo que corresponde al delito de extorsión, de tal manera que en el delito de extorsión se contempla que hay una gran afectación hacia las personas. Por lo tanto, es que se establece de la siguiente manera: Al que obligue a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo teniendo un lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le impondrán de 5 a 10 años de prisión. De tal manera que la extorsión actualmente la tendremos en este rango de sanción. Se aumentará al doble cuando participe algún integrante de alguna corporación ciudadana de cualquier nivel de gobierno o de cualquier servidor o ex servidor público.

Además, se impondrán de 3 a 8 años de prisión cuando en este delito de extorsión intervenga una o más personas armadas, se emplee violencia física, se emplee cualquier mecanismo o amenaza para hacer creer a la víctima la supuesta intervención en el delito de algún grupo vinculado a la delincuencia organizada.

Al mismo tiempo, se incrementarán en dos terceras partes cuando se utilice como medio comisivo un teléfono. Esto también consideramos que es fundamental porque ha crecido de manera importante esta extorsión telefónica en la Ciudad de México.

También queremos señalar, que se hace una revisión muy importante en lo que corresponde al delito de despojo. En el caso del delito de despojo se retoma la intención de la Jefa de Gobierno en el sentido de que han surgido en los últimos años toda una

serie de mafias organizadas que se han dedicado a un despojo incluso con mecanismos cada vez más sofisticados.

De tal manera que esta dictaminadora consideró importante dejar un tipo de despojo básico y establecer una serie de hipótesis de despojo agravado. En este caso se impondrán de 2 a 5 años de prisión en el caso del despojo básico y en el caso del despojo básico, además de esa pena, se impondrá de 6 a 10 años de prisión cuando el despojo se realice por grupo o grupos de más de tres personas, cuando el delito se cometa en contra de persona mayor de 60 años de edad, cuando se simulen actos de autoridad, cuando se utilice documentación falsa, cuando participe un servidor público, cuando se cometa en contra de un ascendiente.

Queremos también resaltar de manera muy importante otra de las preocupaciones señaladas por la Jefa de Gobierno en la cual coincide esta dictaminadora y que tiene que ver con los instrumentos, con los mecanismos de protección que tenemos hacia los integrantes de los cuerpos de seguridad ciudadana.

Hemos establecido claramente que en un régimen democrático se tiene plenamente garantizado el derecho a la libre manifestación y que el derecho a la libre manifestación de las ideas y de la libre expresión no es justificación bajo ninguna circunstancia para justificar agresiones a elementos de los cuerpos de seguridad ciudadana.

Por eso se ha hecho un análisis integral de diversas disposiciones del Código Penal y de la Ley de Cultura Cívica. A iniciativa o a propuesta de la Jefa de Gobierno se establece que se hace una modificación en el apartado relativo a las reglas generales de lesiones y de homicidio, para establecer que cuando la víctima de una lesión o de un homicidio sea algún integrante de alguna corporación de seguridad ciudadana, se establecerá una sanción de un tercio de la pena además de la general. De tal manera que se considera una lesión o un homicidio agravado cuando se comete en contra de un integrante de los cuerpos de seguridad ciudadana.

Al mismo tiempo se establece como parte de esta sanción, la realización de trabajo a favor de la comunidad de 48 a 300 horas. De tal manera que en lugar de la multa se establezca la necesidad de que el actor lleve a cabo trabajo a favor de la comunidad.

También se plantea una reforma a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, a efecto de establecer el artículo 31, en el artículo 26 una nueva infracción contra la

dignidad de las personas, quedando de la siguiente manera, son infracciones contra la dignidad de las personas:

Fracción XI.- Vejar, intimidar, maltratar físicamente o incitar a la violencia contra un integrante de las instituciones de seguridad ciudadana.

Se establece una nueva infracción tipo E de tal manera que: Se sancionará de 20 y hasta 36 horas inmutables de trabajo a favor de la comunidad. De esta manera consideramos que cuando existe una agresión a un elemento de seguridad ciudadana que no implique la realización de otro delito que no implique una lesión o algún otro delito, la sanción proporcional, la sanción adecuada es dejarla en el ámbito administrativo con una pena de trabajo inmutable a favor de la comunidad de 20 a 36 horas.

Se deja el tipo penal de resistencia de particulares a la autoridad, es decir, no existe razón alguna para que un ciudadano se resista ante un mandato legal y legítimo de la autoridad.

Consideramos que estas tres disposiciones, 2 penales y 1 administrativa nos da también la posibilidad de poder hacer la derogación del delito de ultrajes a la autoridad.

Esta dictaminadora considera que este tipo penal tenía un contenido más de carácter político que de protección a los elementos de los cuerpos de seguridad ciudadana, que consideramos efectivamente no podía darse una derogación del delito de ultrajes, si no se contaba con un marco jurídico adecuado para salvaguardar el trabajo de las y los integrantes de los diversos cuerpos de seguridad ciudadana.

También finalmente se establece una figura, se refuerza la figura de obstrucción de la justicia y se sanciona también de manera importante a todas aquellas personas, aquellos funcionarios públicos, se propone el artículo 270 Bis al servidor público que retarde o entorpezca intencionalmente la procuración o administración de justicia, se le impondrá pena de prisión de 3 a 8 años y de 300 a 1000 unidades de medida.

Consideramos que estas disposiciones tendrán un efecto importante en esta política integral de la Ciudad de México y consideramos que también con este paquete de reformas, el Poder Legislativo de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México, está haciendo la parte que le corresponde en este diseño de las estrategias en materia de seguridad ciudadana. De tal manera que este es el dictamen que esta comisión somete a la consideración de las y los diputados integrantes de la comisión.

Así que, diputado secretario, si me hace el favor de preguntar a las y los diputados integrantes, está a su consideración el dictamen para las observaciones o recomendaciones que deseen hacer.

EL C. SECRETARIO.- Sí, presidente, por su instrucción, sometemos a consideración el presente dictamen. Quien tenga observaciones o quiera hacer uso de la palabra.

Diputado Nazario, ¿alguien más? El diputado Lerdo de Tejada y diputada Jannete.

¿Alguien más? Gaviño, Carlos Hernández Mirón, Tere. Ya los apunté en este orden, voy cediendo el uso de la palabra.

Diputado Nazario, por favor.

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputado secretario. Buenas tardes a todas las diputadas y diputados, a la prensa, a todos los invitados.

Me parecen muy bien estas reformas que ha presentado la Jefa de Gobierno. A partir del 2015 en donde se reforman y meten una reforma constitucional los gobiernos anteriores, sale mucha gente, miles de gente de prisión que andan sueltos, efectivamente decían por ahí, la puerta giratoria, entraban y salían, por eso la delincuencia se desató enormemente tanto en esta ciudad como en el país, el dichoso y mal llamado Sistema Penal Acusatorio.

Ahora con estas propuestas creemos que sí endureciendo las penalidades tendremos mayor efectividad para efecto que los delincuentes no salgan de prisión. Celebramos y vamos a votar a favor estos dictámenes, este dictamen.

Nada más a mí me llama un poco la atención, diputado presidente, yo presenté una iniciativa de fraude procesal, del artículo 310. Diputado presidente, si me hace caso por favor. La pregunta, si me puede responder.

Le comentaba que presenté yo una iniciativa de ley de fraude procesal en el artículo 310, que precisamente se permitía cuando una autoridad simule un acto, cuando se utilicen documentos falsos o cuando participe un servidor público, todos esos elementos en el fraude procesal yo presenté la iniciativa, pero veo que no tomaron en cuenta mi iniciativa y no sé qué fue lo que sucedió.

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien. Qué bueno que el diputado Nazario me da oportunidad para aclarar este tema.

Se está planteando poder llevar a cabo dos paquetes de reformas al Código Penal. Este primer paquete de reformas, que como lo señalé toma como base la iniciativa de la Jefa de Gobierno, y que efectivamente considerando la urgencia de toda una serie de medidas que deben de tomarse de manera inmediata en la Ciudad de México, se trató que tenían como base esta iniciativa pudieran dictaminarse únicamente las iniciativas que estaban íntimamente ligadas a la misma materia.

La propuesta que está haciendo esta comisión es precisamente en este periodo de receso poder hacer un segundo paquete de dictámenes al Código Penal.

No quisimos entrar en un análisis completo del Código Penal porque evidentemente nos llevaría mucho más tiempo hacer una revisión de diversos tipos penales.

En el caso de la comisión que comenta el diputado, además la tenemos en Comisiones Unidas. También uno de los criterios que tuvimos fue que pudiéramos dictaminar lo que teníamos en la Comisión de Justicia para poder llevar a cabo de manera muy ágil esta dictaminación.

Por eso es que incluso en las reuniones de trabajo que tuvimos con los integrantes de la comisión se estableció que incluso feminicidio, hay varias observaciones en materia de feminicidio, que estas iniciativas pudieran formar parte de este segundo paquete de iniciativas a efecto que pudiera salir rápidamente dictaminada ésta. De ninguna manera efectivamente se pretende no dictaminar, sino al contrario, poder sacar un segundo paquete de iniciativas.

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputado presidente. Nada más como última pregunta, también presentamos una adición al artículo 224 por el delito de robo de vehículo, donde nosotros proponíamos de 3 a 8 años de prisión y ustedes lo dejaron de 2 a 6, tampoco se tomó en cuenta y eso sí va dentro de eso, la propuesta mía eran 3 a 8 años de prisión para que no tuvieran derecho a fianza. No sé, tampoco se tomó en cuenta, diputado presidente.

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien. Si me pueden pasar esa iniciativa, la tenemos ahí. Sí la tenemos. Si quieres avanzamos ahorita mientras tenemos la información.

En todo caso, el criterio fue si estaban en unidas no incorporarlas, que es el caso precisamente de la diputada Teresa Ramos, que además agradezco mucho la sensibilidad, para que efectivamente no se dictaminara. Si estuviera efectivamente

únicamente en la comisión yo creo que podría incorporarse en el dictamen esa iniciativa, si fuese el caso. Pero si nos da 5 minutos nada más para ubicar la iniciativa.

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- A ver si es posible de que pudiera ser de 3 a 8 años la propuesta.

EL C. PRESIDENTE.- El robo de automóvil lo tenemos de 4 a 8, en el dictamen está de 4 a 8; el robo de autopartes está de 2 a 6, ahí hicimos la diferenciación, robo de autoparte con el agravante genérico. Hay algo muy importante, el agravante genérico es de 2 a 6 años, considerando solamente algunas agravantes que consideramos de delitos de alto impacto es que se está ampliando de 4 a 8 o de 6 a 10, que es el caso de robo de automóvil o el caso de robo a casa habitación.

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- Así es, diputado, yo creo que está correcto, no hay ningún problema. La cuestión es, si entonces mi iniciativa ya queda sin materia, ya la vas a desechar, entonces la hubieras propuesto aquí, para que yo no sé si quedara.

EL C. PRESIDENTE.- Por eso algo muy importante, también quisiera aclarar procedimentalmente. En todos los dictámenes de esta comisión, antes de someter a votación el dictamen abrimos un espacio para poder modificar la propuesta del dictamen, de tal manera poder realizar algunos ajustes, se han estado haciendo la verdad es que una cantidad muy importante de ajustes en base a las diversas observaciones. Aquí, ¿ya tenemos la iniciativa? Si por ejemplo, en este caso la tenemos turnada únicamente a la comisión, la propuesta sería incorporarla en el dictamen. Muy bien. 1-0 a favor del diputado Nazario.

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputado presidente. Gracias, es todo.

EL C. PRESIDENTE.- Correcto. Guillermo Lerdo de Tejada.

EL C. DIPUTADO GUILLERMO DE TEJADA SERVITJE.- Gracias, presidente. Compañeras y compañeros, muy buenos días; saludar igualmente a los medios de comunicación y a quienes nos acompañan.

Más que un comentario específico sobre algún artículo solo quisiera hacer una reflexión general muy breve y tiene que, como todos sabemos, estamos ante una situación muy delicada en materia de seguridad en la ciudad. Lo he dicho y lo sostengo, no es producto

de los 6, 7 meses de esta administración, es un tema que se viene gestando durante muchos años, pero que sin duda se ha agravado en estos meses, hay que decirlo si no aceptamos la responsabilidad de los hechos pues no podremos atenderlos y esa es la realidad.

Dos, no puedo dejar de sentir una especie de dilema, de sentimientos encontrados. ¿Y por qué lo digo? Porque ante esta grave situación por supuesto que hay que hacer algo, pero lo que me parecería un error, no me parece, me parecería un error es pensar que simplemente por aumentar las penas de la forma en la que se está proponiendo y probablemente se haga con eso vamos a resolver la inmensa cantidad de problemas que tenemos de seguridad y de procuración de justicia en esta ciudad.

¿Y por qué lo digo? Porque hay diversos estudios muy profundos hechos y realizados donde te dicen que el delincuente que está dispuesto a pasar una serie de años en prisión por un delito, también lo está dispuesto a ser por unos años más, es decir, el delincuente no toma en cuenta necesariamente el conocimiento del Código Penal y las sanciones antes de cometer la conducta; de lo que sí se toma es del sentimiento y desafortunadamente la realidad de que no lo van a cachar.

¿A qué voy con esto? El tema no está, compañeras y compañeros, en solo aumentar las penas a diestra y siniestra. Si no fortalecemos a las instituciones, si no fortalecemos los procesos de investigación, si no fortalecemos a la policía y a las policías, de nada, de absolutamente nada va a servir simplemente aumentar las penas. Lo que quedará es un gran intento público de pocos resultados, que se le conoce, como ustedes bien saben, al populismo punitivo, es decir, simplemente el salir a anunciar que se aumentarán todas las penas, pero si no damos los instrumentos para combatir de mejor manera los delitos pues no vamos a lograr nada.

Lo digo como un comentario específico, por ejemplo, traemos el tema de las motocicletas, un aumento a las penas cuando el delito se cometa a bordo de una motocicleta, pues está bien que aumentemos la pena, pero debemos de ir por medidas específicas para prevenir los delitos, no simplemente aumentar la pena. Ustedes lo saben, propuse una iniciativa hace unos meses con una propuesta para atender este tema, desafortunadamente hace unas semanas la comisión la desechó. Pero lo que necesitamos son alternativas para prevenir que sucedan. Simplemente aumentar el catálogo o los años o las penas, de verdad no va a servir de mucho si no lo acompañamos de un fortalecimiento institucional.

Simplemente la reflexión, compañeras y compañeros, pues estamos a punto de aprobar me parece un paquete de reformas más amplio que yo por lo menos tenga memoria el aumento a penas en buena parte de los delitos, pero no va a servir de nada si no hacemos el enorme trabajo que nos queda por terminar de fortalecer a las instituciones.

Ese sería el comentario. Muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Quisiera solamente hacer una breve anotación, en el sentido de que no se cayó en la tentación efectivamente de un aumento indiscriminado de penas, consideramos que cada uno de los tipos penales que se está analizando es, o establecer hipótesis no contempladas de fenómenos delictivos que están siendo de alto impacto en la Ciudad de México o, en algunos casos, en donde sí efectivamente las penalidades las traíamos sumamente bajas, el caso de robo a casa habitación; y coincidimos, nos toca otro aspecto también fundamental que es la transición de la Fiscalía y que también es complementario efectivamente a estos instrumentos.

EL C. SECRETARIO.- Diputada Jannete.

LA C. DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.- Gracias, diputado Eduardo. Bueno agradecer a usted y a todo el equipo que colaboró en la integración del dictamen con las observaciones que nosotros hicimos llegar y que se integraron.

También comentarle y pedirle respetuosamente que a través de su conducto se solicite a la Junta de Coordinación Política una ampliación del acuerdo para llevar a cabo las sesiones extraordinarias, debido a que solamente se contempló el Código Penal y ya se está aquí metiendo otras observaciones en cuanto a la Ley de Cultura Cívica. Entonces solo pedir eso para que sigamos el proceso legislativo de manera correcta.

Muchas gracias. Y también comentarle que tengo algunas observaciones pero son de forma y se las hago llegar por escrito. Gracias.

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Pues aprovechamos para pedirle a la diputada Jannete, integrante de la Junta de Coordinación Política, que nos ayude para que se pueda efectivamente ampliar el objeto del periodo extraordinario a efecto de que se pueda también dictaminar lo relativo con la Ley de Cultura Cívica.

EL C. SECRETARIO.- Sigue en el uso de la palabra el diputado Jorge Gaviño.

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Gracias. Primero también una felicitación a la mesa directiva de la comisión y al secretariado técnico de la misma que fue

incorporando y corrigiendo alguno de los comentarios que se fueron haciendo en las mesas de trabajo y también el reconocimiento a los representantes de las diputadas y diputados que estuvieron participando, que fueron horas de trabajo muy arduas.

Un poco también referirme a lo que decía el diputado Lerdo de Tejada, me ganó dos conceptos que iba yo a mencionar, siempre lo hace con gusto, pero referirme también a este punto de vista. Finalmente no es el aumento de penas lo que de alguna manera baja el delito, está comprobado en el mundo. Desde que se creó la autoría de derecho penal se hablaba que primeramente era un castigo que le daba la sociedad al delincuente por haber infringido la normatividad penal y para salvaguardar los valores más queridos de la propia sociedad.

Luego se habló también de cómo podemos reinsertar al delincuente a la sociedad y, por último, que estos castigos deberían ser ejemplares para hacer que sirvan de dique a las acciones ilegales.

De tal manera que, por ejemplo, en el Código Penal del Estado de México, en el tema particular de feminicidio, recordemos que el Estado de México ha sido uno de los estados que ha tenido más problemas con este delito y entonces ellos ya no hallan la forma de buscar acotar las conductas ilegales en contra de las mujeres, y desde luego el feminicidio, que es un delito que ha alcanzado ya las máximas penas en el país.

Primero, el Estado de México tenía el feminicidio como una agravante del homicidio; luego estipularon y partieron con el tema de feminicidio como un delito autónomo y que merecía la prisión de 30 a 50 años; luego pasó de 40 a 70 años el Estado de México, sin ningún resultado, y ahora le agregaron en el 2015 un parrafito que es vitalicio, ya es de por vida. Ya de plano le decían *oiga, lo vamos a condenar a 70 años de prisión*, y el delincuente decía, *pues no voy a pagar tantos años*, y decían *no hay problema, pague lo que usted pueda*, y ahí lo dejaban, ya con 70 años. Ahora todavía le aumentaron a prisión vitalicia, y no ha habido un solo beneficio para la sociedad porque no ha habido una disminución del delito de feminicidio.

Esto prueba aquí con el estado vecino, que no solamente es eso. Puede servir si le damos la suficiente difusión a las penas y que la gente sepa de antemano a lo que se está ateniendo y que el Estado lo va a castigar con una pena ejemplar, pero si eso no ocurre, va a pasar lo que ha ocurrido ahora, de nada va a servir que le cambiemos de 2 a 5 años

o 3 u 8 si no hay una persecución real del delito y luego un castigo realmente ejemplar de las penas, con las penas que estamos nosotros laborando.

El PRD va a estar acompañando esta iniciativa, además con mucho entusiasmo, porque finalmente queremos, junto con la Jefa de Gobierno, decir que estamos en contra de la impunidad, que exista realmente el castigo, que exista la reinserción del delincuente y que exista la aplicación estricta del derecho.

Entonces, vamos a estar con esta iniciativa, nosotros no discutimos el asunto de si era más o menos las penas, no lo quisimos hacer porque finalmente no va a servir si no se acompaña de una política pública de persecución del delito adecuada.

Gracias.

EL C. SECRETARIO.- El diputado Carlos Castillo.

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- Muy buenas tardes, gracias. Vengo de invitado a la sesión, ya que no pertenezco a la comisión.

Se me hace muy importante resaltar lo que estamos haciendo en el Congreso de la Ciudad de México, en el sentido de fortalecer el marco legal en procuración de justicia de la ciudad.

Me parece muy importante lo que dice el diputado Gaviño, en términos de que no solamente es el aumento de la pena, sino también debe de incluir el combate a la corrupción y acabar con la impunidad en la ciudad y por eso se me hace muy viable resaltar -muy importante resaltar- que esta no es una iniciativa aislada de la Jefa de Gobierno, sino es un marco de iniciativas legales para justamente lograr eso, porque en este salón estamos discutiendo el tema de procuración de justicia y Código Penal, pero en el salón de al lado estamos discutiendo el tema de seguridad ciudadana, que me parece que va en esa misma lógica de no solamente agravar la pena, sino de fortalecer también los cuerpos de seguridad de la Ciudad de México.

También me parece muy importante y debido al origen que tenemos varios diputadas y diputadas de este Congreso, la derogación de artículo 287 referente al delito de ultrajes a la autoridad, es un articulado que se había utilizado anteriormente para perseguir a actores políticos.

Recordemos el 1° de diciembre cuando tomó protesta Enrique Peña Nieto, que muchos jóvenes que hacían valer su derecho a la manifestaciones fueron reprimidos, fueron

encarcelados de manera política y es importante resaltar que se está acabando con esos tiempos, que la Jefa de Gobierno desde su toma de protesta dijo que se iba a acabar la represión y la persecución política de los opositores en la ciudad.

Se me hace muy interesante, muy importante, cómo se quita este elemento judicial para judicializar la actividad política y, por el otro, lado se fortalece la protección de los cuerpos policíacos al sancionar aquellas personas que causen lesión a algún servidor público, algún oficial, que esté haciendo su labor social de protección ciudadana, ya que durante muchos años cuando fuimos oposición, toda nuestra lucha fue pacífica y muchos estuvimos en la resistencia civil pacífica y aún así fuimos reprimidos y ahora es muy importante que se dé ese vuelco.

Por otra parte, quiero resaltar también el tema de delito de extorsión. En esta misma legislatura, que a principios de año en Coyoacán vivimos un tema de un servidor público de la Alcaldía de Coyoacán que fue acusado y fue condenado por el tema de extorsión y es reincidente, porque hace 4 años esta misma persona fue condenada por el delito de extorsión y debido a precisamente a que no teníamos este fortalecimiento en el Código Penal esta persona cometió la reincidencia, volvió a cometer el delito de extorsión y no pisó la cárcel, por el laxo en el marco legal que teníamos.

Ahora esta combinación de la reincidencia en términos de la persona delincuente, más el doble de pena a servidores públicos por el tema de delito de extorsión, pues va a llevar también a fortalecer el combate a la corrupción, porque entonces sí me parece muy importante y coincido con el diputado Gaviño de que, después de que aprobemos todo este marco legal, hay que hacer una amplia difusión del mismo, para que aquel servidor público que también tenga la intención de seguir actuando llevando el erario público a sus arcas personales o utilizando el cargo para su beneficio personal, pues que lo piense dos veces porque ahora sí vamos a tener un marco legal fortalecido.

Ahora que aprobemos esto, si esa persona hubiera llevado a cabo ese delito posterior a esto, nos estaría ahorita libre, disfrutando del dinero con el cual realizó la extorsión. Entonces, me parece muy loable por parte de la Jefa de Gobierno esta acción que se está haciendo para la ciudad.

También reconocer a las y los integrantes de esta comisión el oficio político por el bien de la ciudad, el dejar también atrás las diferencias partidarias para construir una ciudad segura para todas y todos, que todos la vivimos y la queremos disfrutar.

Es cuanto, presidente.

EL C. SECRETARIO.- Diputado Mirón.

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Muchas gracias, diputado secretario.

Primero quiero, de igual manera que mis compañeras y compañeros legisladores, reconocer el trabajo, el esfuerzo de las y los integrantes de esta Comisión, de igual manera de las compañeras asesoras y asesores que han generado una serie de conceptos y aportaciones que me parecen relevantes, que han ayudado al cuerpo de este producto legislativo.

Diputados y diputadas, yo quisiera plantear de manera muy puntual la situación con respecto a la derogación de los artículos 168, 186, 187, 188, 188 bis y 206 bis, debido a que esta propia derogación pudiera tener un efecto contrario y pudiera generar una situación complicada, inclusive la liberación de algunos presuntos delincuentes; entonces, poner a consideración de esta comisión que se pudiera mantener y no se llevara a cabo en un primer momento la derogación de los mismos.

Sí es verdad que se ha avanzado de manera altamente consistente en elementos importantes que tendrán que ser penalizados, que tiene que ver con la propuesta de la doctora Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en donde se atiende de manera directa el sentir de la población, la necesidad de encontrar un mecanismo que vaya garantizando mecanismos de seguridad, pero también de impartición de justicia.

Me refiero obviamente al proceso que vamos a tener todas y todos en esta ciudad una vez que aprobemos sea publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, condiciones que permitan también la judicialización de este tipo de delitos. Me parece que no solamente estamos llevando a cabo la atención de las y de los ciudadanos, sino también el proceso directamente con los órganos impartidores de justicia.

No puedo omitir, porque lo escuché y lo planteaba Guillermo y también Jorge en el tema que no solamente tiene que ser endurecer la sanción, me parece que se tienen que atender estos aspectos que ellos han mencionado. No solamente se acepta el planteamiento por parte de la ciudadanía, sino la Jefa de Gobierno actúa en consecuencia.

Un ejemplo que quiero resaltar es el tema del Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos, que comienza a funcionar a partir de ya en esta Ciudad de México, en donde va a haber más de cuatro mil jóvenes, hombres y mujeres, que ya saturaron la solicitud y los espacios de la matrícula para este Instituto, en donde se van a impartir aproximadamente 12 carreras de nivel profesional, y es la forma también de cómo se actúa, no solamente en elevar la sanción, sino también atender el origen de la inseguridad en esta ciudad y de la problemática que vivimos. Me parece que es uno de los temas más importantes, atender el origen de la problemática de inseguridad que se vive en esta ciudad.

Si un gobierno democrático, un gobierno progresista no atiende el tema de la educación, me parece que se cometería un grave error. Afortunadamente en este caso la instauración del Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos atiende el origen de la problemática, obligación del Gobierno de la Ciudad de México también enviar este paquete de modificaciones al Código Penal, que son variaciones aproximadamente entre 10 y 11, obviamente se está atendiendo de manera integral, fortaleciendo el programa de seguridad para todas y todos.

No podía dejar pasar como integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia la transformación del cuerpo de granaderos a un cuerpo de reacción, también el fortalecimiento de la Policía de Investigación tanto en la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

También nosotros como diputadas y diputados de esta comisión la enorme responsabilidad de darle seguimiento a la transición de Procuraduría a Fiscalía, eso me parece que también va a reforzar. Yo retomo lo que han comentado mis compañeras y compañeros legisladores, porque también se hizo en esta comisión el planteamiento de balizar los cascos, chalecos que bien lo comentaba Guillermo, y a mí me parece que no es un tema que quede todavía fuera, en este momento el presidente de la comisión plantea una segunda etapa donde podamos ir revisando y atendiendo este tipo de planteamientos que han hecho diputadas y diputados.

Recuerdo cuando se llevó aquella discusión en esta comisión, yo solicité de igual manera que ese tema no quedara suelto, que no se desechara, que se retomara en mesas de trabajo y en un segundo momento obviamente atenderlos porque son realmente

atendibles, la gente lo está solicitando, la gente vive una problemática y se va a llevar a cabo.

Concluyo diciendo que si el gobierno de la ciudad a nombre de la Jefa de Gobierno ha mandado un paquete muy importante que recoge el sentir, que recoge la preocupación de las y de los ciudadanos, pero que también se está atendiendo el origen de la problemática de inseguridad en esta ciudad, el Instituto Rosario Castellanos es un ejemplo que tenemos que seguir multiplicando en la Ciudad de México.

Y concluyo obviamente también, diputado presidente, para que no se lleve a cabo la derogación de los 6 artículos que he mencionado.

Muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Coincidentemente con el planteamiento que hace precisamente el diputado Carlos Hernández Mirón, quisiera si ustedes me permiten dar lectura al artículo 121 del Código Penal, con la observación que ha hecho, señala: Cuando la ley suprima un tipo penal se extinguirá la potestad punitiva respectiva por la de ejecutar las penas o medidas de seguridad impuestas; se pondrá en absoluta e inmediata libertad al inculcado o al sentenciado y cesarán de derecho todos los efectos del procedimiento penal o de la sentencia.

Por esta misma razón consideramos, hemos estado haciendo un análisis conjuntamente con el Tribunal Superior de Justicia, con la Procuraduría a efecto de que no la derogación implique efectivamente la aplicación de esta disposición. Por lo tanto atendiendo estas observaciones y la propuesta, sí consideramos que es importante que se mantengan los tipos penales en este momento, no entrar a una derogación hasta en tanto no tengamos la certeza jurídica de que no existirá esta hipótesis. Única excepción sería obviamente en el caso del artículo 287 para el caso de ultraje.

EL C. SECRETARIO.- Sigue en el uso de la palabra la diputada Lourdes.

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Buenas tardes a todas y a todos compañeros diputados. Me uno a celebrar esta propuesta de dictamen toda vez que fueron varias horas de trabajo en mesas con asesores y propiamente también entre nosotros los diputados y, efectivamente, junto con la Ley de Seguridad Ciudadana que se está discutiendo en una sesión permanente que tenemos todos los que integramos esa comisión, pues van a respaldar sin duda toda la estrategia de seguridad y política criminal

del Gobierno de la Ciudad de México, que sin duda obedece y responde a las necesidades y a las exigencias de los ciudadanos.

Considero que, más allá de aumentar las sanciones solamente por aumentarles, lo que se hizo fue identificar las conductas ilícitas y adecuar el tipo penal que ya establecía el Código Penal para ello y adecuándolo en una justa dimensión de las penas.

Celebro mucho el aumento de las sanciones del robo a casa habitación, asimismo, el de robo a celulares y, sobre todo, el derogamiento; que bueno, ahorita escuché que va a ser en otro sentido del artículo 287 que era ultrañes a la autoridad, que como ya lo mencionaron muchos de mis compañeros, solamente era un delito que se utilizaba para la persecución política y no así para defender a la propia autoridad y, sobre todo, porque se salvaguarda el tipo penal de resistencia particular y creo que eso nos da a todas y a todos la garantía de que nuestros policías y nuestras autoridades van a seguir teniendo el respaldo jurídico para poder ejercer su acción.

También comentar, que en ese sentido todas y todos los diputados avalamos un comité de transición de Procuraduría a Fiscalía, y que ellos también son ciudadanos y creo que le darán las herramientas y el andamiaje jurídico necesario para que la nueva Fiscalía realmente tenga y ocupe todas estas necesidades y exigencias que hemos manifestado para una exacta y un verdadero cumplimiento de la procuración de justicia.

Celebrar la apertura del presidente, que sí le hemos dado muchas vueltas al proyecto de dictamen, pero creo que eso obedece a la preocupación tanto de la oposición como los del grupo parlamentario mayoritario en que esto no es cuestión de partido, sino es una cuestión de exigencia y que tenemos qué darle resultados a los ciudadanos.

Entonces, enhorabuena para todos.

Es cuánto.

EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz la diputada Teresa Ramos.

LA C. DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.- Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas.

El dictamen que se nos presenta hoy recoge elementos que permite atender diversas preocupaciones de la ciudadanía ante la inseguridad que hoy se vive en nuestra ciudad.

Quiero empezar señalando, que una de mis preocupaciones han sido los delitos cometidos en razón de género sobre las mujeres y por eso en noviembre presenté una iniciativa para duplicar las penas para quienes cometieran dicho delito, por lo que haber plasmado mayores penas en estas modificaciones al Código Penal me permite dar por atendida nuestra preocupación respecto de la falta de penas ejemplares en el caso de feminicidio.

Por lo que hace a las agravantes que se proponen para el delito de robo, éstas van a servir para que los impartidores de justicia puedan dictar sentencias con penas más altas y se logre desincentivar la comisión de los delitos que hoy en día tienen mayor incidencia en la Ciudad de México.

Una incorporación de gran importancia nos parece es la de definir la reincidencia, ya que eso permitirá que los delincuentes con antecedentes penales y que hayan sido condenados con anterioridad, no puedan obtener beneficios a la hora de la aplicación de la pena.

Por lo anteriormente expuesto y acompañando a la iniciativa de la Jefa de Gobierno en materia de seguridad ciudadana, es que votaré a favor del presente dictamen para dotar las instituciones de justicia de mayores elementos que ayuden a dictar sentencias acorde a la realidad que hoy enfrentamos y poder generar en la ciudadanía una mayor seguridad y tranquilidad.

Es cuánto, gracias.

EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputada. No habiendo otro orador más que el diputado Martínez Urincho, que ahorita regresa, entonces me permito hacer uso de la voz, diputado presidente.

En principio, manifestar nuestro beneplácito en virtud de que también se están dictaminando tres iniciativas del grupo parlamentario de Acción Nacional, iniciativas que evidentemente hablan del robo a casa habitación como un delito autónomo, así lo propuso el diputado Héctor Barrera.

El tema del robo a celulares también fue propuesto por Acción Nacional dado el incremento en este delito que se ha dado en la ciudad, y uno fundamental que se está insertando en el Código, es el relativo al de figura jurídica de reincidencia.

Ya avanzamos, ya se está integrando en el Código, se está agravando la pena, se está estableciendo una pena al reincidente hasta el aumento en dos terceras partes. Ya se elevó digamos en esta materia. Sin embargo, estamos exigiendo, estamos pidiendo, estamos impulsando desde Acción Nacional que la pena sea de cadena perpetua, que sea pena vitalicia.

Esto lo quiero insistir en este momento del dictamen, en virtud de que sí tenemos esa puerta giratoria en los reclusorios. Hay delincuentes que han entrado no una, dos, tres, cuatro veces al reclusorio, sino en más de 20 ocasiones, que hacen de su vida un *modus vivendi* la delincuencia, y estos delincuentes no los podemos seguir teniendo en la calle, máxime que estamos en una crisis de inseguridad, ya así lo hemos reconocido todos los grupos parlamentarios, ya así lo ha reconocido la Jefa de Gobierno y ante esta crisis me parece que lo importantísimo es que aquellos que se dedican como *modus vivendi* a estar delinquir, no permitamos que entren y salgan del reclusorio.

Cuando entran la primera ocasión, cuando son primo delincuentes, salen con licenciatura, vuelven a entrar una segunda ocasión, salen con maestría delictiva y salen hasta con doctorado en materia delictiva y esto evidentemente nosotros decimos desde Acción Nacional que le pongamos ya ese candado a esa puerta giratoria y por eso pedimos esta medida drástica, y ante grandes males, pues grandes soluciones también y no tengamos a los delincuentes en la calle. En este momento procesal es que hago la petición para que votemos la modificación al dictamen en ese sentido.

También reconocer, coincidir, con lo que han dicho los grupos parlamentarios del PRD y del PRI y algunos también de MORENA, no basta con que elevemos estas penas.

Sí efectivamente no se están elevando sin motivo alguno las penas de algunos delitos, se están determinando en cuáles en específico implica su aumento, pero esto es la última consecuencia que podremos tener, porque el Código Penal significa ello, es la última, cuando ya fracasó todo el sistema, cuando fracasó la prevención, cuando ya fracasó todas las medidas y una persona comete un ilícito es cuando ya entra el Código Penal, que estamos en este momento analizándolo.

Por eso es importante sí mandar el mensaje a la ciudadanía que ante esta crisis de inseguridad, estamos incrementando la sanción a los delincuentes, pero tiene que verse todo lo de medidas preventivas, antes de llegar a esta la última ratio, la última razón que

tiene el Estado para ya ponerle una pena corporal, que es privarle de la libertad a una persona, a un ser humano y pase su tiempo, su vida, años recluso en una cárcel.

Bueno, esto es respecto a las medidas de prevención que tendremos que estar impulsando y seguir analizando no en esta comisión, también en otras comisiones.

Coincidir también con lo que ha propuesto ya la mesa respecto de mantener los artículos que se pretendían derogar, ya en las reuniones de trabajo lo comenté, dada la naturaleza que son esos delitos, esos tipos penales que se pretendían derogar como es turismo sexual, como son pornografía infantil y si bien se establece una ley general en contra de la trata, Ley General para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, lo cierto es que derogar un delito como la pornografía infantil en la ciudad, es delicado, es peligroso y ya se ha propuesto en la mesa mantenerlo ese y otros delitos, lo cual también estamos coincidiendo para que se mantengan.

También coincidir si se va a quedar o más bien si vamos a derogar un solo delito del Código Penal que va a ser el de ultrajes, bueno estamos estableciendo una figura de la protección a los cuerpos de seguridad para que tampoco sean agredidos, para que ese ultraje, digámoslo así, esa agresión física no quede sin sanción, sino que sea ahora por vía de la Ley de Cultura Cívica.

Incluso lo debería de decir, si están con esa visión, escucho a la mayoría de los diputados, de la mayoría, el diputado Carlos Castillo celebrando la derogación del delito de ultraje, iremos en ese camino, pues habría que recomendarles a nuestros amigos legisladores de Tabasco que no busquen incrementar la pena en materia de marchas y de condenar la protesta social en ese sentido, porque ya lo han dicho ustedes, el no permitir la libre expresión, el ser autoritarios y justamente y pedir que la gente se manifieste, no debería de ser un delito.

Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE.- El diputado Urincho.

EL C. DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Buenas tardes, diputadas, diputados.

Brevemente mi intervención sería en una propuesta a la propuesta que presenta el diputado Carlos Hernández Mirón, en relación al tema precisamente de revisar si se deroga o no el delito de ultrajes a la autoridad.

Tendríamos un problema, diputado Carlos Mirón, si ahorita vamos en esta tónica de dejarlo y ya lo mencionaba el diputado Orlando, lo tenemos en otro ordenamiento de carácter administrativo precisamente, entonces tendríamos la misma conducta regulada por dos ordenamientos diferentes, en Código Penal y en la Ley de Cultura Cívica.

Entonces, creo que tendríamos este problema técnico en el dictamen, diputado Santillán. Yo le pediría al diputado Mirón, precisamente argumentando también, que el delito de ultrajes al momento no es un delito agravado o grave, por lo cual las personas que pudiesen haber sido sujetas al procedimiento pueden estar precisamente gozando de su libertad bajo los beneficios que otorga la ley.

Yo ahorita me he dado a la tarea con mis asesores de buscar el índice, la estadística que pudiese haber, si hay personas ahorita en este momento privadas de su libertad compurgando una pena o una condena con motivo de ese delito.

Creo yo, a mi parecer, ahorita en una reflexión así muy lógica y rápidamente común, no veo yo el impacto, diputado presidente, precisamente que ahorita pudiese generarse, el que se pudiese evitar que se derogara este delito de ultrajes a la autoridad.

Entonces sería la propuesta, diputado Carlos Mirón, argumentando toda esta información de darle continuidad precisamente al dictamen como se está presentando en este momento y, obviamente tendremos que hacer el ejercicio, me sumo al espíritu y comentarios que han vertido mis compañeras diputadas y diputados, que tendremos que ir a un esfuerzo tanto en el tema de la Fiscalía, de esa transición, y el tema de la Ley de Seguridad Pública, pero que nos va a impactar, compañeras diputadas y diputados, en la elaboración de un Código Penal más preciso, una ingeniería legal más a fondo para atender precisamente la problemática de atención precisamente de estas conductas antisociales que lesionan precisamente a la sociedad, a ciertos grupos o individuos de nuestra sociedad. Eso sería por una parte, diputado presidente, hacerle la propuesta entonces, ya concretando al diputado Carlos Hernández Mirón.

La otra, diputado presidente, escuchándolo que vendría otro paquete de reformas al Código Penal, nada más quiero dejar aquí el antecedente con motivo de agravar precisamente el tema del despojo, tendría que -esta figura de otro delito, que sería el allanamiento de morada- también agravarlo, también sería importante, no solamente haciendo referencia a ese fenómeno que se está dando en la ciudad en relación al despojo de inmuebles, también se refleja en otras conductas delictivas.

Por ejemplo, hemos observado cómo personas ingresan a los domicilios para agredir, para inferir lesiones. Independientemente que surja ese delito en contra de la integridad de las personas, de la integridad física de las personas, este tema como se está dando ya comúnmente, de meterse, lo vemos ya en las notas periodísticas, ingresan a los domicilios, matan a las familias, matan a las personas, pero está habiendo mucho en esa lógica el que ingresen precisamente a los domicilios para afectar la integridad física de las personas. Por eso sí sería importante, diputado Santillán, que en este caso el delito de allanamiento de morada también se pudiese establecer su agravamiento.

Concluyo, diputado presidente, que también tendríamos que establecer una serie de reglas en la figura de la tentativa, precisamente porque lo dejamos aquí en el tema genérico, pero sí sería importante, compañeras diputadas y diputados, que también fuéramos muy explícitos y concretos para el tema de las tentativas en los agravamientos de esos tipos penales.

Porque hay que decirlo, hay que mencionarlo, compañeras diputadas y diputados, hoy en día la delincuencia es muy sofisticada, el que te va a robar, el que va a allanar, el que te va a despojar tiene muy buen asesoramiento jurídico y saben hasta qué momento precisamente para poder estar esquivando el tema de la justicia.

Entonces, este tema sí me llama la atención, diputado presidente, que no pudiésemos estar tocando algunas reglas muy específicas con relación a la tentativa y sería importante, no creo que ahorita, diputado presidente, abordar el tema de la figura de la tentativa en estos tipos penales, pero sería importante para el siguiente paquete poderlo revisar.

Sería cuanto, diputado presidente. Le agradezco.

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Quisiera yo únicamente, precisamente hablando sobre el tema de ultrajes, se establece en el dictamen y me permitiría leer los considerandos de la Suprema Corte de Justicia en el amparo de revisión 2255/2015, en donde hace el análisis de este tipo penal, es efectivamente en revisión de amparo, por lo tanto no tuvo efectos de declaración de inconstitucionalidad, sino solamente de aplicación de beneficio para los que quejosos, y rápidamente leo: En un examen efectuado al numeral en cuestión permite concluir a este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que: *Primero, el artículo impugnado es la medida más lesiva contra el ciudadano que decide expresar sus ideas a través de ultrajar a la autoridad, pues*

sanciona con privación de la libertad esa expresión de ideas, sin que ello esté verdaderamente justificado o sea necesario en una sociedad democrática, dado el bien jurídico que intenta proteger; y segundo, que la manera como el legislador redactó el tipo penal y el término que utilizó resulta demasiado amplio para disuadir y sancionar cierto tipo de conductas que si caen fuera del discurso protegido, ya sea por ser dirigidas a funcionarios que realizan cierto tipo de funciones específicas o que las palabras o expresión utilizada tenga como finalidad única el provocar odio e incitar a la violencia a aquella persona que lo recibe.

El impacto de la falta de adecuación o idoneidad del tipo penal cuestionado no solamente se da en su potencial aplicación al discurso constitucionalmente protegido, sino que además puede llevar a que los ciudadanos de este país, al dudar acerca de si su comportamiento puede o no ser incluido por las autoridades bajo la amplia noción de ultraje a la autoridad, se inhibirán o renunciarán por temor a expresarse del modo desenvuelto que es propio en una democracia consolidada y se refugiarán en la autocensura, de ahí que el mismo sea considerado inconstitucional. Por todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 287 del Código Penal para el Distrito Federal debe considerarse violatorio de la libertad de expresión.

Por eso, como lo comentamos, considerando estos razonamientos de la Suprema Corte, no se quiso dejar efectivamente un vacío jurídico que implicara el solo hecho de derogar sin establecer mecanismos adicionales de protección. Por eso es muy importante conservar el delito de resistencia a la autoridad, que es un tipo que nos parece mucho más sólido, mucho más consistente a agravar las lesiones y el homicidio.

¿Y específicamente qué es lo que pretendemos con la modificación a la Ley de Cultura Cívica? Tener un instrumento muy ágil, muy inmediato, de tal suerte que, y que además tenga una pena proporcional, si hay, lo que hemos visto a policías que empujan, que tiran en el metro, OK, muchas de las ocasiones no es necesario llevar esa acción ante una instancia de carácter penal. Lo que estamos pretendiendo es efectivamente que sea un mecanismo inmediato que sea puesto inmediatamente a disposición del juez cívico y que en cuestión de horas tenga una sanción importante y evidentemente a agravar si los delitos de homicidio en sus diversas características, el homicidio simple y el homicidio calificado, así como las diversas lesiones que pudieran ser objeto de estas faltas.

Si no hubiera alguna. Diputado Gaviño.

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Muy brevemente, un poco comentando lo que decía el diputado Urincho, en primer lugar el tema de delito de ultrajes era un delito grave anteriormente, recordemos los que estamos aquí en la VI Legislatura tuvimos un gran debate sobre ese tema porque finalmente, cuanto quitamos digamos como delito grave y lo dejamos como está hasta el día de hoy, pues tuvieron la oportunidad de salir muchísima gente que estaba en proceso dentro de prisión precisamente por la gravedad del delito.

Entonces, finalmente ahora por las razones que expuso el Presidente se está quitando este delito y se está pasando a un asunto de orden administrativo, que consideramos nosotros correcto.

El tema de las tentativas creo que sí es muy importante, el PRD tiene una iniciativa que ojalá se resuelva en los próximos días en el sentido de tentativa de feminicidio, por ejemplo.

Actualmente, si un delincuente tiene la idea *criminis* de por ser mujer, lesionar su vida a esta mujer y falla en el intento, es una tentativa de homicidio porque no se configura la tentativa de feminicidio. Entonces sí es muy importante para complementar esta reforma que se den paso a otras que ya tenemos en la Comisión, como por ejemplo, ésta que se señala como tentativa.

EL C. PRESIDENTE.- Correcto. Diputado Hernández Mirón.

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Muchas gracias, diputado.

Sé que ya ha pasado bastante tiempo con respecto a este hecho importante de modificar el Código Penal, pero sí me parece importante que si el Congreso de la Ciudad de México está luchando para proteger la vida de las mujeres desde las entrañas de la propia ley, y esa es una asignatura que nos estamos dando todas y todos los que nos encontramos aquí, también me parece muy importante resaltar el tema de garantizar plenamente el derecho a la libre expresión.

Me comentaban algunos compañeros y compañeras asesores y asesoras, que hasta el día de hoy con respecto a la situación de la toma de protesta del anterior Presidente de la República, sigue habiendo jóvenes, sí es verdad que ya no hay un solo joven, también es una realidad que uno de ellos pasó prácticamente toda la pena, estuvo 6 años en

reclusión y actualmente hay 200 jóvenes que siguen un proceso penal yendo a firmar cada mes a la Procuraduría de Justicia.

Entonces, me parece que obviamente es un tema importante que nosotros tenemos que darle atención y afortunadamente en este momento se está derogando este tema que obviamente va a permitir que se pueda llevar a cabo la justicia de las y los jóvenes y obviamente el respeto íntegro del derecho a manifestarse.

Me parece muy importante que resaltemos estos temas.

Muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Yo solamente quisiera hacer tres observaciones para en todo caso hacer propuesta de modificación.

Son algunas observaciones que principalmente me ha hecho llegar el Tribunal Superior de Justicia, que me parece que son atendibles.

En primera instancia, sería agregar en el artículo 246 las fracciones IX, X y XI y en el inciso D, a efecto de que los robos que estamos contemplando como robos agravados, se establezca que se persigan de querrela, en el sentido de que en términos generales todos los robos al ser delitos patrimoniales, son delitos que se persiguen de querrela, entonces simplemente armonizar esta disposición. En lo particular me parece que es perfectamente atendible.

En el caso del 138 bis, que es precisamente cuando las víctimas de lesiones o de homicidios sean integrantes de los cuerpos de seguridad ciudadana en ejercicio de sus funciones para poder agregar también o *con motivo de ellas*, que también implica una concepción más amplia de la función y del ejercicio.

De igual manera que se pudiera pasar lo que actualmente tenemos en el 270 bis, que pudiera convertirse más bien en un artículo 292 bis, el delito de obstrucción a la justicia, ya que existe una hipótesis establecida en el 292, estamos poniendo una sanción mayor a la obstrucción de la justicia y simplemente en términos de estructura dentro del Código Penal, poderla establecer como la fracción III del actual artículo 292, que me parece que también pudiera ser atendible.

Si no hubiera alguna otra observación, propondría la siguiente mecánica, a efecto de que tenemos la propuesta de dictamen. Yo sugeriría en todo caso poder someter aquí sí a aprobación de ustedes que se modifique la propuesta antes de que pudiéramos someter a

votación el dictamen, considerando que no hay reservas propiamente en esta instancia de la comisión, que si hubiera alguna reserva a algún artículo, la comisión solamente recibe y turna en todo caso hacia el pleno.

Si ustedes estuvieran de acuerdo, poder someter a votaciones económicas estas modificaciones a la propuesta de dictamen antes de someter el dictamen a la modificación. Si me permiten, lo haremos de manera individual.

En primera instancia sería la propuesta de incorporar dentro del dictamen la dictaminación de la iniciativa del diputado Nazario Norberto, en el sentido de robo a vehículo. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano.

Muy bien, se aprueba entonces esta modificación.

De igual manera, la incorporación dentro del apartado de antecedentes de la iniciativa de la diputada Teresa Ramos en materia de aumento de penas de feminicidio, en virtud de que, al estar en Comisiones Unidas, no es posible dictaminarlo, pero sí hacer referencia en los antecedentes que se toma en consideración su propuesta. De tal manera que los que estén por la afirmativa, también favor de manifestarlo.

De igual manera el diputado Carlos Castillo nos comenta el poder incorporar también dentro de la dictaminación, presentó una iniciativa de modificación precisamente al delito de extorsión, cuando participan servidores públicos, que está de acuerdo en términos generales, está de acuerdo en los términos en los que está el dictamen, de tal manera que también se incorporará ahí en el dictamen esta iniciativa. Los que estén a favor de esta modificación, favor de manifestarlo levantando la mano.

A la propuesta del diputado Carlos Hernández Mirón, de suprimir dentro del dictamen y dentro del decreto la derogación de los artículos 168, 186, 187, 188, 188 Bis y 206 Bis, a efecto de que queden los términos en los que actualmente están en el Código Penal por las razones y motivos que ya fueron expresados aquí. De tal manera que los que estén a favor de que se modifique la propuesta del dictamen en este sentido, favor de manifestarlo levantando la mano.

De igual manera, a la propuesta del grupo parlamentario de Acción Nacional de incorporación del dictamen la figura de la pena vitalicia, hay que señalar que en el caso de la iniciativa de pena vitalicia se establece dentro del dictamen que se aprueba parcialmente en el sentido de que se retoma la figura de la reincidencia y se considera que, en el caso de la Ciudad de México, la pena vitalicia es un tema que no es acorde con

el espíritu de la propia Constitución de la Ciudad de México. De tal manera que las y los diputados que estén a favor de modificar la propuesta de dictamen e incorporar el concepto de pena vitalicia, los que estén a favor de esta modificación, favor de manifestarlo levantando la mano.

En contra.

No se modifica el dictamen en este sentido.

La propuesta de incorporar en el artículo 246 las fracciones IX, X, XI y el inciso D) a efecto de que los robos contemplados en el artículo 224 sean considerados también como delitos que se persiguen de querella. Si quieren las tres en su conjunto, así como el 138 Bis para que se agregue en el concepto de cuando la víctima sea un elemento de seguridad ciudadana en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas y pasar los términos del actual artículo 270 Bis al 292 Bis, el delito de obstrucción de la justicia.

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE.- Perdón, yo nada más tengo ahí un comentario de procedimiento. El artículo 292 actual trae penas distintas a las que están planteándose en el 270 Bis.

EL C. PRESIDENTE.- Por eso se establecen en el 292.

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE.- Entonces la duda es: ¿Vamos a poner...

EL C. PRESIDENTE.- La penalidad que se plantea en el dictamen, por eso se establece un 292 bis, para que específicamente se contemple a quien de manera, lo leo expresamente:

En primera instancia se derogaría la fracción III: A quien retarde o entorpezca debidamente la administración de justicia.

Se crea un 292 bis que aplica para obstrucción de justicia, efectivamente para administración y procuración de justicia, de tal manera que al servidor público que retarde o entorpezca indebidamente la procuración o administración de justicia se le impondrán de 3 a 8 años de prisión.

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE.- De acuerdo, ya me queda más claro.

EL C. PRESIDENTE.- Correcto. Muy bien.

Los que estén a favor de esta modificación en la propuesta del dictamen, favor de manifestarlo levantando la mano.

En contra.

Se aprueba.

Entonces, una vez ya aprobadas estas modificaciones al dictamen, procederíamos ahora sí ya a poner a consideración el dictamen con estas modificaciones, a las y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

Si no hubiera algún otro comentario, le solicitaría al diputado secretario si me hiciera el favor de tomar la votación, si a ustedes les parece, si pudiéramos hacer una votación nominal señalando nuestro nombre y el sentido de nuestro voto con el dictamen. Si les parece, iniciamos del lado izquierdo con la diputada Lourdes Paz.

(Votación Nominal)

Lourdes Paz, a favor del dictamen. Por la libertad de nuestros presos políticos.

Lerdo de Tejada, a favor.

Teresa Ramos, a favor del dictamen.

Lizette Clavel, a favor.

Jannete Guerrero, a favor.

Diego Garrido, a favor del dictamen en lo general.

Eduardo Santillán, a favor del dictamen.

Mirón, en pro.

Yuriri Ayala, en pro.

Leticia Estrada, a favor del dictamen.

Martha Ávila, a favor del dictamen.

Ricardo Ruiz, a favor.

Gaviño, sí.

EL C. SECRETARIO.- Diputado presidente, se aprueba con 12 votos a favor el dictamen.

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. De esta manera queda aprobado el dictamen de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia que modifica el Código Penal y la Ley de Cultura Cívica, por el bien de la ciudad.

Muchas gracias.

Muy buenas tardes.

